

Jueves 6 de Septiembre de 1973

Valor de la Palabra del Gobierno

Parte decisiva del estado crítico de Chile lo constituye un fenómeno nuevo en nuestra tradición nacional, y ella es la falta de credibilidad que se ha ganado el Gobierno por el incumplimiento sistemático de todos y cada uno de los compromisos que ha debido asumir en el transcurso de su gestión.

Ciertamente, los diversos regímenes fueron criticados por una oposición más o menos dura, como corresponde y conviene a una democracia, por actitudes, estilos o inspiraciones consideradas ineficaces, inconvenientes y hasta inmorales. A veces estas críticas fueron justas, otras no. Cabe recordar, en todo caso, que jamás existió una oposición más implacable, ensañada, injusta y hasta falsaria que aquella que incansablemente acaudilló el señor Salvador Allende en la búsqueda sin escrúpulos del mando que por fin consiguió gracias a la honestidad democrática de los mismos a quienes él negó «la sal y el agua» desde el primer día de Gobierno, por boca del entonces principal vocero suyo. Sin embargo, hubo algo que antes subsistió, aún en el fragor de las más intensas campañas o en lo más dramático de los conflictos sociales. Cuando el Gobierno encontraba solución a un conflicto sobre la base de compromisos a cumplirse en el futuro, los sindicatos o gremios afectados, así como el país entero, sabían que esos compromisos serían respetados. La responsabilidad y el sentido de dignidad de todos los gobernantes y ministros anteriores de este país no les permitía actuar de otra manera y en ella descansaba la confianza de la opinión pública, más allá de la censura por determinadas actuaciones concretas.

Hoy día se ha terminado hasta la confianza. Y definitivamente.

Basta citar unos pocos ejemplos, entre los muchos, los innumerables que podrían señalarse. Ellos afectan, sin excepción, al Gobierno del señor Allende como tal, aunque hayan personificado también tales incumplimientos diversos ministros, tanto civiles como militares.

El año pasado, el Ministro de Salud, doctor Carlos Concha, llegó a un acuerdo con el Colegio Médico respecto a remuneraciones y condiciones de trabajo de los profesionales de los servicios a su cargo. El acuerdo no se cumplió.

A raíz del paro nacional del comercio y del transporte terrestre de octubre, se suscribió y publicó un acta que ponía fin al grave y prolongado conflicto, con las firmas de los Ministros Carlos Prats, Luis Figueroa, Orlando Millas y Fernando Flores. El incumplimiento total a este acuerdo y aún su burla constituyeron el germen del actual caos que vive Chile, con 17 provincias paralizadas y el resto avanzando progresivamente a la paralización también total.

El Ministro señor Jorge Tapia formuló —hace poco— diversas proposiciones a los funcionarios de la Junta de Auxilio Escolar y Becas respecto a remuneraciones y otras materias. El incumplimiento total de tal arreglo por parte del Gobierno llevó al paro a la institución.

El ex y actual Ministro del Interior, señor Carlos Briones, se comprometió —también hace poco— en carta pública con los funcionarios de Correos y Telégrafos a otorgarles un mejoramiento económico. Tal compromiso no se ha cumplido y pronto habrá ahí también un paro de los servicios.

Y podríamos seguir enumerando incumplimientos, con despidos, persecuciones, abusos e inmoralidades prometidas corregir y mantenidas en forma impertérrita.

¿Quién tiene, entonces, la culpa de que una marea ciudadana esté llegando al extremo de pedirle al señor Allende que se vaya? ¿Quién tiene la culpa de que los gremios y los ciudadanos todos, desesperados, lleguen al límite de preferir dejar de trabajar y hasta de comer, como único modo de intentar que se les reconozcan sus derechos?

Un Gobierno sin palabra no es Gobierno.

Pero vale la pena volver sobre este aspecto en lo referente al actual conflicto del transporte terrestre, porque la actitud del Ejecutivo puede decirse que ha llegado en él a la superación absoluta en materia de tramitación, engaño, vejación a los gremios y burla sangrienta a dos Generales de la República designados por él mismo, como son los señores Contreras, nombrado Interventor del conflicto, y el señor Magliochetti, Ministro de Obras Públicas y Transportes.

Después de más de treinta días en que se mantuvo el conflicto artificialmente —ya que el gremio no pedía nada nuevo sobre el acta de noviembre de 1972, sino sólo su cumplimiento— se iniciaron una serie de «ultimátums» contra los dueños de camiones, que cayeron en el ridículo, porque los afectados sencillamente no se dejaron intimidar. Finalmente —y después de pasar el asunto por las manos de tres Ministros que se sucedieron en el cargo y de haber formado el Gobierno un «Comité Operativo» para tratar el conflicto—, se llegó a un acuerdo que fue considerado satisfactorio por los gremios. Y ello no sólo porque se había terminado por acceder a las peticiones, sino también porque se estipulaba que su cumplimiento quedaría esta vez garantizado por una ley de la República.

Las gestiones fueron, naturalmente, laboriosas. El General Contreras, como Interventor, fue tejiendo cada uno de los acuerdos y confirmándolos previa consulta con el Ministro, General Magliochetti, quien, a su vez, seguramente, consultaría al Presidente u obraría autorizado por éste. Finalizada así el acta, que debía transformarse en ley y entregada al Ministro Briones, el Gobierno declaró repentinamente que no había ningún arreglo pendiente.

Y, como si esto fuera poco, agregó que el General Contreras había actuado sólo como «asesor».

En otras palabras, se desconoció sin tener siquiera un miramiento, a la labor de los dos Generales, se desautorizó su actuación, se anularon sus compromisos y hasta —caso único en este Gobierno— se declaró que un Interventor sólo podía actuar como asesor, negándosele a posteriori al General Contreras, todas las facultades que invariablemente se le han concedido a estos funcionarios.

El conflicto del transporte, por consiguiente, continúa. Con la diferencia de que tanto engaño está llegando más allá del límite de tolerancia del gremio y del país. La palabra del Gobierno no tiene valor alguno, ni siquiera para velar por el prestigio personal de sus propios Generales.

Para colmo, en la tarde del martes, el conflicto se tiñó de sangre. Choferes y dueños de camiones que habían obstruido un camino en protesta por la tramitación y que ya habían aceptado despejarlo, fueron baleados por la espalda mientras escapaban de una represión con gases disuasivos. Un muerto y tres heridos, uno de ellos gravísimo, quedaron en el campo.

Es obvio que este increíble hecho no hubiera ocurrido si el señor Allende y sus Ministros hubieran cumplido con su parte al despachar oportunamente como proyecto de ley el acta de arreglo del conflicto acordada en su totalidad con el propio Gobierno.

La tragedia del martes resulta, pues, de la exclusiva responsabilidad y como consecuencia directa de sistemáticamente sus promesas. El señor Allende tiene mucho que explicar al respecto. Y más todavía, cuando en innumerables ocasiones las calles de Santiago han sido invadidas por extremistas que resistieron a la policía, sin que tales elementos recibieran castigo alguno. Incluso existe una fotografía publicada, para vergüenza nuestra, en todo el mundo, que muestra a un extremista apaleando a un carabinero que sólo se cubre la cabeza con sus manos.

A todo requerimiento de sensatez, se continúa respondiendo con engaño y represión.